

**B) COMISION DE ESTUDIO  
PARA LA REFORMA DE LA LEY 11.683**

El señor Ministro de Hacienda y Finanzas, doctor Juan A. Qui-  
lici, invitó a la Asociación para que se expida sobre el proyecto  
de reforma de la ley 11.683.

El Consejo Directivo de la Asociación designó a los doctores  
Roberto O. Freytes y Carlos M. Giuliani Fonrouge para que la  
representaran en la Comisión especial creada al efecto.

También participaron en representación de otras entidades  
invitadas los siguientes miembros de la Asociación:

— ROMAN G. JAUREGUI	}	POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
— LEONEL R. MASSAD		
— OSCAR PARREÑO		
— MIGUEL M. COSTA	}	POR LA FEDERACION ARGENTINA DE COLEGIOS DE ABOGADOS
— MARIO R. MICELE		
— JORGE E. REBIZO	}	POR LA FEDERACION ARGENTINA DE COLEGIOS DE GRADUADOS EN CIENCIAS ECONOMICAS
— ISAAC RECHTER		
— MANUEL M. RISUEÑO		

A continuación se transcribe el informe elevado a la Federación  
Argentina de Colegios de Graduados en Ciencias Económicas  
por el contador Jorge E. Rebizo y los doctores Isaac Rechter y  
Manuel M. Risueño, al cual adhirieron los representantes de la  
Asociación.

Buenos Aires, 2 de setiembre de 1971

Señor Presidente de la  
Federación Argentina de  
Colegios de Graduados en Ciencias Económicas,  
Dr. Juan José Valdetaro,  
Viamonte 1592,  
CAPITAL.

Ref.: *Actuación en la Comisión de Estudio del proyecto  
de modificación de la ley Nº 11.683.*

Tenemos el agrado de dirigimos a usted con el objeto de dar cuenta de la actuación que cupo a los suscriptos en representación de esa Federación en la Comisión designada por el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Nación para el estudio del proyecto de modificación de la ley Nº 11.683.

En primer lugar cabe señalar que todos los representantes de las entidades invitadas a integrar la Comisión hicieron presente a los funcionarios del Ministerio la conveniencia de realizar un análisis meditado y a fondo de la ley en cuestión, a cuyo efecto sugirieron la ampliación del plazo establecido para expedirse, en forma tal que pudieran contemplarse en el proyecto definitivo las modificaciones que podría originar el estudio de la reforma de todo el régimen impositivo que paralelamente había encarado la otra Comisión, también designada por el Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Tal sugerencia no prosperó y como es de conocimiento del señor Presidente, las tareas de la Comisión de que formamos parte fueron interrumpidas a poco de iniciarse, en razón de que los funcionarios oficiales recibieron instrucciones para elevar de inmediato el proyecto a la superioridad.

Por dicho motivo, pocos fueron los temas acerca de los cuales pudimos emitir opiniones que, en principio, fueron acogidas favorablemente, si bien no es de nuestro conocimiento que se hayan reflejado en el proyecto elevado cuyo texto definitivo no fue sometido a nuestra consideración.

Los temas tratados fueron los siguientes:

- 1) Prueba;
- 2) Sanciones;
- 3) Intereses;
- 4) Determinaciones parciales;
- 5) Aplicación del Código procesal.

A continuación y por su orden informamos acerca de las opiniones expuestas por los firmantes sobre cada uno de ellos.

- 1) *Prueba*: El proyecto establece que el ofrecimiento de la prueba y su sustanciación deben efectuarse ante la Dirección General Impositiva. No hemos compartido, en principio, este criterio, entre otros, por los siguientes fundamentos:
  - a) porque no parece apropiado que la prueba sea rendida ante una de las partes intervinientes en el litigio;
  - b) porque la función de la Dirección General Impositiva debe ser principalmente inquisitoria y no contradictoria;
  - c) porque por razones de objetividad, el análisis de los hechos controvertidos debe reservarse a organismos ajenos a la administración activa;
  - d) porque el sistema establecido implica trasladar los problemas derivados de la prueba del Tribunal Fiscal a la Dirección General Impositiva, que no cuenta con la organización y elementos necesarios para afrontar ese trabajo, lo que presumiblemente dará lugar a nulidades, nuevas pruebas ante el Tribunal Fiscal o la Justicia, etc., que en definitiva entorpecerán en lugar de facilitar la marcha del proceso.

Sin perjuicio del punto de vista expuesto aconsejamos que, de mantenerse el criterio de ofrecer y producir la prueba ante la Dirección General Impositiva, se establecieran en la propia ley las normas que aseguren el debido proceso, la defensa plena del derecho de los contribuyentes, el acceso de éstos a las pruebas que tuviere la Dirección General Impositiva, en general, la posibilidad de ejercer el contralor de todas las etapas previas al dictado de las resoluciones de la Dirección General Impositiva.

En este sentido llamamos la atención sobre el hecho de que la facultad que el artículo 7º del proyecto atribuía a la Dirección General Impositiva para "dictar el Reglamento Interno de Procedimientos estableciendo el trámite y los términos que deben regir las etapas procesales, en las cuestiones relativas al orden jurisdiccional de su competencia, complementando las normas legales y reglamentarias", no debía extenderse más allá de lo que precisamente fuera del orden interno de la Repartición recalcando así la necesidad de que todo lo relativo a la prueba sea regulado en la ley misma.

2) *Sanciones*: Hicimos notar a los funcionarios del Ministerio que tanto en la ley vigente como en el proyecto, se establecen penas severísimas que en la práctica no se aplicaron jamás (pena de prisión para los agentes de retención que no ingresen el impuesto retenido en término, multas por defraudación de hasta 10 veces el impuesto, etc.). Que el mantenimiento de sanciones de tal magnitud era contraproducente porque su no aplicación en los hechos les quitaba la seriedad y severidad que pretendidamente tenían. Por ello sugerimos eliminar la pena de prisión, reducir las multas por omisión (hasta un 50 % del impuesto omitido) y las aplicables por defraudación (en lugar de un tanto hasta diez tantos del impuesto, un medio tanto hasta cinco tantos del impuesto).

3) *Intereses*: Manifestamos nuestro acuerdo con el proyecto en el sentido de sustituir los actuales recargos, cuya naturaleza jurídica ha sido y sigue siendo tan controvertida y discutida, por un interés resarcitorio aplicable automáticamente por la simple mora, fijado en la tasa del 1,25 % mensual que consideramos adecuada. Propiciamos, al mismo tiempo, que se estableciera un

límite máximo al interés (100 %, por ejemplo) para los contribuyentes inscriptos, no así para los no inscriptos.

4) *Determinaciones parciales*: El artículo 26 del proyecto mantiene el texto actual en lo que se refiere a la facultad de la Dirección General Impositiva de practicar determinaciones de oficio parciales y, consecuentemente, la de modificar mediante nuevas determinaciones los aspectos no considerados en las anteriores. Esta disposición ha sido muy criticada y con razón, porque atenta contra el principio de estabilidad en la relación fisco-contribuyente y porque el hecho imponible es uno solo y no es propio parcializarlo. Por dichas razones, aconsejamos suprimir la facultad en cuestión.

5) *Aplicación del Código procesal*: También se mantienen en el proyecto las disposiciones actuales de la ley 11.683 que reglan el procedimiento judicial, esto es, que al margen del procedimiento establecido por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para la actuación ante el Poder Judicial, existe un procedimiento paralelo y a la vez distinto cuando de impuestos se trata. Consideramos y así lo hicimos presente que tal procedimiento especial no respondía a ningún fundamento consistente y, por ello, sugerimos su eliminación y remisión en lo pertinente al referido Código.

Lo que antecede es todo cuanto cabe informar acerca de nuestra actuación en la Comisión para el estudio del proyecto de reforma de la ley 11.683.

Saludamos al señor Presidente con distinguida consideración.

JORGE E. REBIZO

ISAAC RECHTER

MANUEL M. RISUEÑO